

¿Qué pasa en los Estados Unidos?

EN ESTE NÚMERO

Editorial: El Partido Republicano después del Impeachment

La ciberseguridad en tiempos de Biden

Estados Unidos y Venezuela: el falso relato del bloqueo

¿Qué pasa en el Golden State?

¿Cuál será la política exterior de Biden?

EDITORIAL

POR CESCOS

Donald Trump ha sido el primer presidente en la historia de los Estados Unidos en enfrentar dos procesos de juicio político o Impeachment. Su absolución representa un signo de interrogante para el sistema y un desafío sustancial para el futuro del Partido Republicano. En este mismo espacio hemos remarcado que el complejo escenario de polarización partidaria en el país tiene una doble dimensión: por un lado, los dos partidos tradicionales han consolidado una creciente distancia entre ellos pero el problema principal radica al interior de ambas fuerzas políticas. Tanto Republicanos como Demócratas se encuentran atravesando procesos de distanciamiento o diferenciación entre sus facciones internas. Sin embargo, hemos mencionado que mientras la lógica de la polarización interna dentro de los Demócratas es horizontal (entre una expresión de centro-izquierda y otra radical), la dinámica dentro de los Republicanos es vertical (es decir, entre dos formas de conservadurismo, uno popular y otra más clásico).

Básicamente, la cuestión radica (o radicaba) en la mayor complejidad comparada que ofrecía el proceso en el Partido Demócrata ya que la capacidad de diálogo entre ambos espacios era cada vez más difícil. Es que la profunda convicción de, por ejemplo, Bernie Sanders o Elizabeth Warren chocaba con las convicciones de, por ejemplo, Barack Obama o John Kerry. Las concepciones ideológicas entre Sanders y Kerry son sustancialmente diferentes, en un punto, demasiado diferentes.

La dinámica dentro de los Republicanos era vertical y esto suponía que, como ejemplificamos en distintas ocasiones, los acuerdos se alcanzaban entre un Senado de un conservadurismo clásico y una Casa Blanca de un conservadurismo popular. Ambos desconfia-

-ban del otro pero, en un punto, encontraban una política común. Paso seguido, el problema es ahora cómo procesará el ala conservadora clásica, que retiene un poder sustancial de las estructuras formales e institucionales, la notable fuerza de la base conservadora-popular que percibe a Trump como líder y como símbolo. Es decir, la pregunta que el desenlace del Impeachment no responde porque ni siquiera se pregunta es cómo se llevará a cabo la negociación entre, por un lado, un político desprestigiado pero popular, incapaz de regresar con un mínimo grado de probabilidad a la pelea por la Casa Blanca pero con una relevante capacidad de daño y, por otro lado, una corriente clásica del Partido que necesita a los simpatizantes de Trump, que no tiene un líder emergente con la vocación para convencer a esa minoría intensa y cohesionada, que desconfía de Trump pero que tiene que negociar con él algo que no se sabe bien qué es. Trump es consciente de esto pero también comprende los enormes desafíos y limitaciones que le presenta su futuro político.

En ese escenario es que los Republicanos deberán sentarse a negociar en un corto-mediano plazo algo que no tiene un sentido definido y acotado. En definitiva, ¿Deben negociar con Trump que candidatos apoyar en las elecciones de medio término a cambio de evitar su postulación a la Cámara de Representantes o del Senado porque, de ser así, sería para los Demócratas una imperdible oportunidad de nacionalizar una elección entre el pasado y el futuro, entre la opacidad y la transparencia? Más aún, la dura base conservadora que responde y, al menos en el corto-mediano plazo, responderá a Trump, ¿le permitirá no presentarse en 2022? Es decir, ¿Cómo presentar como una negociación tácita pero transparente algo que tiene semejante carga simbólica para esa minoría

intensa? Ante este contexto es posible pensar que la dinámica de la interna Republicana devendrá en el corto plazo tan compleja como la dura discusión que sucede dentro del Partido Demócrata.

Más aún, en un escenario donde los actores saben que haber alcanzado el poder funciona como factor de cohesión y, por otro lado, otros actores saben que haber perdido el poder puede funcionar como factor atomizador.

POLÍTICA

LA CIBERSEGURIDAD EN TIEMPOS DE BIDEN

POR LUCIA SALVINI



El nuevo gobierno de Joe Biden enfrenta desafíos diversos y complejos. La ciberseguridad es uno de ellos ya que es un área sensible tanto por la propia opaca dinámica de las agencias locales involucradas como por las evidentes amenazas globales que sufre el país desde actores externos estatales de creciente relevancia geo-estratégica y de actores no estatales atomizados pero capacitados para llevar a cabo acciones de impacto.



"No sirve únicamente incluir el ciberespacio en la agenda política de un gobierno y que este proclame su importancia estratégica, sino que se requiere un sistema nacional de ciberseguridad integral y dinámico, que posibilite una dirección y gestión eficiente de la seguridad y la defensa (...)"

En una de las últimas ediciones del 2020 del Newsletter "¿Qué pasa en los Estados Unidos?" nos preguntamos qué medidas tomaría Joe Biden, como presidente electo, ante el desafío de la ciberseguridad del país que, en la era del ex mandatario Donald Trump, fue vulnerada en más de una ocasión. Recordamos el ataque a la empresa SolarWinds que se dio a conocer en diciembre del año pasado y que implicó a más de 18.000 entes privados y 40 entes públicos en todo el mundo: entre ellas se destacan organizaciones que integran la lista Fortune 500, los 10 principales proveedores de telecomunicaciones de Estados Unidos, cinco ramas del ejército norteamericano, el Departamento de Estado, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Oficina del Presidente.

Un día después de su investidura, Biden asumió

las responsabilidades por el ataque a SolarWinds y pidió a las agencias de inteligencia una evaluación completa del incidente. En este contexto, y a un mes de su llegada a la Casa Blanca, el presidente ha demostrado una vez más la preponderancia que tiene el tema en su agenda: recientemente, se dio a conocer el nuevo equipo de funcionarios que ocuparán aquellos cargos que abolidos durante la gestión de Donald Trump (quien había tomado la decisión de rescindir el cargo de coordinador de ciberseguridad en 2018). De hecho, el nuevo equipo gubernamental ya nombró a la funcionaria de la NSA, Anne Neuberger, como nueva asesora adjunta de Seguridad Nacional para las nuevas tecnologías.

Anne Neuberger, oriunda de New York, es conocida como una "veterana de los servicios de inteligencia". Ha trabajado para administraciones

demócratas y republicanas y es la primera mujer en ocupar este puesto. Entre otros hitos, figura en su currículum haber sido en 2016 la encargada de proteger varios comicios en el país una vez que se filtraran las injerencias rusas en las elecciones presidenciales.

Si bien Estados Unidos no adopta ninguna norma internacional de ciberseguridad, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) provee un Marco de Seguridad Cibernética, que establece normas aplicables a las empresas de infraestructura crítica. Además, en 2015 el Congreso aprobó lo que se catalogó como el “primer intento serio” por mejorar la ciberseguridad. La Ley de Compartición de Información de Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo aumentar la protección gubernamental a aquellas empresas que voluntariamente decidan compartir con el Gobierno federal los datos que consideren podrían constituir ciber amenazas. Si bien la iniciativa recibió cierto apoyo, fueron muchos los que se opusieron, incluso grandes empresas con estrecha vinculación a la tecnología y el internet como Twitter, Yelp, Apple y Reddit.

Ya en 1998 Bill Clinton había firmado una directiva presidencial en donde definía ocho sectores críticos cuyos servicios son vitales para el funcionamiento de la nación y su incapacidad de operación o destrucción tendría un impacto directo en la defensa o en la seguridad económica de los Estados Unidos. Tales sectores eran: energía eléctrica, producción, almacenamiento y suministro de gas y petróleo, telecomunicaciones, bancos y finanzas, suministro de agua, transporte, servicios de emergencia y operaciones gubernamentales (mínimas requeridas para atender al público). De esta manera, un ataque masivo y coordinado a alguno o varios de estos sectores significaría una

condición importante y crítica para una nación, ya que pondría en juego la estabilidad de la misma y la confianza de la ciudadanía en su gobierno para enfrentarse a estas amenazas. Incluso países como el Reino Unido calificaron los ataques cibernéticos como una amenaza de Nivel Uno, junto con el terrorismo internacional.

En un momento decisivo, fuertemente marcado por la crisis económica, política y social, pero también por la consolidación de nuevas potencias regionales, la traslación del principal centro de gravedad estratégico global a la zona Asia-Pacífico, la imparable dependencia tecnológica de la sociedad y los nuevos riesgos para la seguridad nacional, Estados Unidos parece alejado de su zona de confort y se encuentra en un escenario pantanoso del que la nueva administración intenta salir.

No sirve únicamente incluir el ciberespacio en la agenda política de un gobierno y que este proclame su importancia estratégica, sino que se requiere un sistema nacional de ciberseguridad integral y dinámico, que posibilite una dirección y gestión eficiente de la seguridad y la defensa: un marco legislativo que se adecue a la realidad, inversión en infraestructura y capacitación, colaboraciones público-privadas, concientización y educación en el uso seguro y responsable del ciberespacio en todos los sectores de la sociedad. Será cuestión de esperar poco tiempo para conocer si la gestión de Joe Biden está a la altura de la madurez política y económica que se requieren para llevar adelante este tipo de desafío y si, a comparación de la gestión anterior, dispone de la determinación política necesaria y de la claridad de objetivos e ideas para no caer en la irrelevancia cibernética y condicionar el futuro (no tan lejano) de la seguridad nacional.

Ya decía Robert Strange McNamara, ex Secreta-

-rio de Defensa estadounidense entre 1961 y 1968, durante el período de la guerra de Vietnam: “En una sociedad que se moderniza, seguridad significa desarrollo.

La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no puede haber seguridad. Una nación en desarrollo, que, de hecho, no se desarrolla, no puede permanecer segura”.

LUCIA SALVINI

Fellow de CESCOS

 **LuliSalvini**

POLÍTICA

ESTADOS UNIDOS Y VENEZUELA: EL FALSO RELATO DEL BLOQUEO

POR JOSE PONTE RANGEL



El bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela no existe. Ha sido un relato muy bien armado. Existe una casta gobernante violenta, autoritaria y corrupta que se ha enriquecido de manera escandalosa. Es imprescindible investigar y condenar a los culpables.



"Fue tanto el robo y los privilegios que el dinero se fue acabando. El precio del petróleo cayó y la revolución chavista no tuvo otra opción que entregar el territorio venezolano al narcotráfico internacional (...)"

El contexto

Cuando distintos procesos políticos latinoamericanos fallan, principalmente por corrupción, algunos políticos mediocres han buscado siempre en los EE.UU. un culpable, un "enemigo externo". El ejemplo más paradigmático es "La revolución chavista", pues ha culpado a los EEUU por fallas eléctricas, por falta de leche en los supermercados e incluso por la devaluación del bolívar. 500 mil millones de dólares es la cifra estimada en corrupción entre los años 2005 y 2011, cuando Venezuela gozaba de la bonanza petrolera más grande de su historia y el régimen de Chávez manejaba el monopolio de las divisas, es decir, solo el gobierno podía poseer divisas, y tanto las empresas como los individuos solo podían tener bolívares. Era ilegal si una persona tenía dólares, a menos que el gobierno se lo autorizara.

La fiesta populista chavista se extendía por América Latina. Cuba recibía 100.000 barriles de petróleo diarios sin costo. En Ecuador y Bolivia se financiaban obras públicas. Se vendía a Uruguay petróleo con descuento y se importaban de Brasil y Argentina productos que se podrían producir en Venezuela, pero que las empresas nacionales no fabricaban porque estaban amenazadas de expropiación o el gobierno no autorizaba los dólares para poder importar insumos. El negocio era importar. Finalmente, se construyó el esquema de "PetroCaribe", esto para garantizar votos favorables a la revolución en la "Organización de Estados Americanos" (OEA) donde diferentes actores y delegaciones denunciaban violaciones a los Derechos Humanos y quebrantamiento a la democracia, pero las resoluciones no eran aprobadas ya que el socio del chavismo se negaba. En el Caribe se repartían por día aproximadamente 300.000

barriles de petróleo.

En paralelo, se desarrollaba un esquema de importaciones ficticias. Como en todas las dictaduras, una casta se beneficia del desastre. En este caso hubo políticos, empresarios y militares con un mismo modus operandi: crear empresas de importación para poder acceder a los dólares administrados por el gobierno a un precio preferencial y venderlos en el mercado negro de divisas con más de 200% de ganancia. Los contenedores en muchos casos llegaban vacíos a los puertos de Venezuela pero, por cierto, las facturas se pagaban. Un caso emblemático fue el de "Pudreval", donde se encontraron toneladas de alimentos podridos porque se habían comprado casi expirados, aún cuando se pagaban como productos de primera calidad.

Fue tanto el robo y los privilegios que el dinero se fue acabando. El precio del petróleo cayó y la revolución chavista no tuvo otra opción que entregar el territorio venezolano al narcotráfico internacional, manejado hábilmente por dos grupos terroristas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de liberación Nacional (ELN), ambos grupos debilitados durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que encontraron refugio en territorio venezolano. Hoy la revolución chavista se sostiene por los ingresos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal en zonas protegidas del Amazonas.

Sanciones económicas individuales

La casta política, empresarial y militar que se beneficiaba de la corrupción y últimamente del narcotráfico, ha utilizado empresas para blanquear el dinero, han invertido en distintos

lugares de América, Europa, Asia e incluso África. En España, en el lujoso barrio Salamanca de Madrid, se pueden encontrar a empresarios socios del chavismo, muchos testaferros, con edificios completos, como es el caso de Raúl Gorrin. En el caso de América, han invertido en República Dominicana, Panamá y Estados Unidos. En este último país día a día crecían las inversiones de empresas o fondos vinculados a venezolanos. En ese momento es cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los EE.UU. entra en acción. Es completamente falso el relato construido de bloqueo económico que intenta colocar al régimen cívico militar que oprime a Venezuela en posición de víctima. La realidad es que funcionarios chavistas, empresarios y militares han utilizado el sistema financiero de los EEUU para blanquear dinero y por eso han sido sancionados.

El militar Alejandro Andrade participó junto a Hugo Chávez en el intento de golpe de estado de 1992 y fue tesorero nacional durante el régimen. Solo en los EE.UU. se le ha encontrado una fortuna de más de 1.000 millones de dólares. Hoy está preso y con todos los activos en EE.UU. congelados. Jesús Veroes, empresario que fungía como testaferro del ministro chavista Luis Mota Domínguez, se le ha encontrado una fortuna en EE.UU. por 260 millones de dólares. Hoy tiene con los activos congelados y se encuentra preso. Alex Saab, empresario colombiano, señalado por ser testaferro de Nicolás Maduro, se le ha comprobado una fortuna de 300 millones de dólares en los EE.UU. y se estima que sus bienes alrededor del mundo se acercan a los 3.000 millones de dólares. Saab no solo ha participado en el esquema de importaciones ficticias sino también en el blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico.

-fico. Está preso en Cabo Verde, con orden de extradición por parte de EE.UU., donde sus activos están congelados.

Estas tres personas son un ejemplo de cómo actúan las sanciones económicas individuales. Ninguna de las órdenes ejecutivas del Presidente Obama o el Presidente Trump apuntaron contra Venezuela, siempre han apuntado contra personas vinculadas a la corrupción o al narcotráfico. Durante el gobierno del Presidente Trump, las sanciones personales se ampliaron e incluyeron la congelación de activos y la prohibición de ingreso al territorio estadounidense de personas señaladas de ser partícipes de violaciones a los Derechos Humanos. En este caso, más de 25 funcionarios de alto nivel del régimen de Maduro están incluidos y todos los altos cargos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de inteligencia. El relato del bloqueo es falso, lo que existen son sanciones personales.

Venezuela hoy

El régimen de Maduro a través del relato construido sobre “el bloqueo” repite constantemente que no puede comprar medicinas. Sin embargo, las principales ciudades de Venezuela están inundadas de locales comerciales conocidos como bodegones, donde se puede comprar desde nutella, jamón serrano ibérico hasta Johnny Walker blue label. Mientras en las calles se pueden observar autos de alta gama como Range Rover, BMW y Ferrari, todos de último modelo. Por supuesto, todo esto reservado para la casta chavista cívico militar.

En Venezuela se ha instaurado una dolarización implícita donde cada día el bolívar se devalúa entre 1% y 2%. La mayoría de los venezolanos hoy viven de las remesas de sus familiares en el exterior ya que un sueldo mínimo equivale a 4 dólares por mes.

Resulta curioso, aunque no sorprendente, que dirigentes de izquierda como Ignacio Ramonet, Gustavo Petro, Piedad Córdoba, Pablo Iglesias y, entre otros, el denominado Grupo de Puebla, constantemente intenten repetir el relato del bloqueo contra Venezuela para justificar la incompetencia y la corrupción del régimen de Maduro, mientras la casta cívico militar chavista lleva una vida de lujos y excesos. El pueblo venezolano cada día busca como sobrevivir a la hiperinflación y la devaluación. Según la Encuestas Nacional de Condiciones de Vida, realizada por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello, más del 73% de los venezolanos viven en la pobreza

Las sanciones económicas a los corruptos y narcotraficantes deben seguir y deben aumentar.

JOSE PONTE RANGEL

Político

 **JosePonte**

POLÍTICA

¿QUÉ PASA EN EL GOLDEN STATE?

POR AGUSTIN PIZZICHILO



California vive horas decisivas. Los ciudadanos han utilizado un recurso constitucional que les permite juntar firmas para intentar remover al gobernador, el polémico demócrata Gavin Newsom. El plazo vence el 17 de marzo y están a menos de 100.000 de alcanzar las firmas 1.495.709 necesarias.



"Si la destitución sucediera, estaríamos ante la inédita posibilidad de ver a un candidato republicano competitivo, intentando recuperar la gobernación de un estado clave después de 9 años"

El estado de California esta viviendo en estos momentos una situación particular en lo político. Los ciudadanos del "Golden State" están juntando firmas para poder remover a su gobernador y elegir uno nuevo. No obstante, no podemos decir que juntar firmas para remover un gobernador en California es una situación extraña ya que es algo que se ha intentado en varias ocasiones a través de los años.

Para hacer un poco de historia: en 1939 sucedió en California el primer intento de recolección de firmas con la intención de remover a un gobernador. En ese caso era el republicano Culbert L. Olson, quien finalmente sufrió 5 intentos, aunque ninguno consiguió las firmas necesarias para llevarlo a votación. Desde esa fecha hasta hoy pasaron 12 gobernadores y 10 de ellos enfrentaron intentos de ser removidos a través de la recolección de firmas. En 2003 fue el

primer caso donde se alcanzaron las firmas requeridas y el gobernador de aquel entonces, el Demócrata Gray Davis, fue removido. Hoy nos enfrentamos a una situación similar con el también gobernador demócrata, Gavin Newsom, quien se encuentra a menos de 100.000 mil firmas de verse sometido a una votación para ser removido de su puesto.

El proceso que se tiene que dar para remover a un gobernador en California es sencillo y por eso a través del tiempo se lo ha intentado tantas veces. Para poder llevar a votación la destitución de un gobernador se debe conseguir el 12% de las firmas de los votantes de la última elección. Tienen 160 días para alcanzar ese número pero, por la pandemia se concedieron 120 días más. Este proceso comenzó en junio de 2020 y quienes lo impulsan tienen tiempo para presentar las firmas hasta el 17 de marzo de 2021. Para

poder llegar a la votación se necesitan 1.495.709 firmas. Es muy probable que se llegue a la cantidad requerida porque a poco más de un mes del deadline se necesitan menos de 100.000 firmas. Esta particular situación en California tiene, lógicamente, una trascendencia nacional.

En la historia de los Estados Unidos sería tan solo la cuarta ocasión en que se podría llevar a cabo una la votación para definir la continuidad de un gobernador de turno. Las tres ocasiones anteriores, una de ellas también en el estado de California, terminaron con la destitución del gobernador.

Gavin Newsom fue electo para su puesto de Gobernador en el año 2018 con un 62% de los votos, venciendo al candidato Republicano por más de 24 % de diferencia. Antes de ser electo Gobernador había sido Vice-Gobernador del Estado y alcalde de la ciudad de San Francisco. Dentro de sus principales apuestas políticas ha estado el apoyo a leyes para los inmigrantes, el apoyo a favor de la legalización del aborto para todos los Estados y la legalización de la marihuana. El gran descontento de la población con su Gobernador se debe principalmente por el mal manejo que ha realizado de la pandemia e incluso gente de su propio partido le esta soltando la mano. Esto se puede confirmar con los datos de aprobación de su trabajo que vienen a la baja. En septiembre de 2020 Newsom tenía una aprobación del 64%. En las últimas encuestas realizadas, a fines de enero de 2021, su aprobación había bajado en 20 puntos, llegando a ser de 44% entre los votantes de California. Es necesario remarcar que el Estado de mayor tamaño del país (que lo constituye en la séptima economía del mundo) atraviesa una crisis fiscal sin precedentes.

Newsom ha tomado decisiones criticadas por aliados y por enemigos políticos. Al principio decidió cerrar la economía del estado. Esto generó un profundo rechazo de los sectores más conservadores. Hoy enfrenta delicadas negociaciones con maestros y administrativos para reabrir las escuelas. No lo está logrando. Su plan de vacunación ha sido bastante confuso. Ha tenido problemas con los distribuidores y ello ha generado demoras en las entregas de las vacunas. Hoy California está en el puesto 39 de 50 estados de peor porcentaje de dosis administradas. Pero todo empezó a decaer a partir del pasado noviembre en donde asistió a una cena, sin utilizar tapabocas, sin distanciamiento social mientras todo el resto del estado seguía con confinamiento y el sector gastronómico se enfrentaba en muchos casos a la quiebra. Esta situación se convirtió en el punto de inicio de la recolección de firmas.

Es muy probable que se llegue a la cantidad de firmas para generar la votación y que la población deba decidir si el gobernador seguirá en su puesto o será destituido. Cuando el Gobernador Gray Davis fue removido en 2003 California todavía estaba en proceso de volverse un estado azul. Hoy se ha convertido en un estado demócrata radical. Al Gore en el 2000 alcanzó el 53% de los votos. En 2004 Kerry obtuvo el 54%. Esto nos muestra que el partido Republicano tenía aún una importante participación en el estado. Si nos posicionamos en 2016 y a las últimas elecciones de noviembre pasado, podemos ver que los demócratas alcanzaron el 61% y 64% respectivamente. Estos números estarían reflejando que a pesar de llegarse a la votación las probabilidades de que Newsom sea destituido son bajas, aunque, probablemente, se eleve la tensión una vez se confirme por la Corte que se ha llegado a la cantidad de firmas necesarias.

Si la destitución sucediera, estaríamos ante la inédita posibilidad de ver a un candidato republicano competitivo, intentando recuperar la gobernación de un estado clave después de 9 años.

AGUSTIN PIZZICHILO

FELLOW de CESCOS

 **AgustinPizzi**

POLÍTICA

¿CUÁL SERÁ LA POLÍTICA EXTERIOR DE BIDEN?

POR MARÍA PÍA AMORIN



La política exterior de la administración Biden buscará marcar concretos puntos de quiebre con la anterior.

Particularmente, el nuevo gobierno intentará ser previsible para sus históricos aliados e involucrarse con decisión en los ámbitos multilaterales dejados de lado por Donald Trump.



"Hoy parecería ser que el camino de Biden es el camino diplomático, apartado de la venta de armas, el castigo público y las amenazas azarosas"

"Estados Unidos ha vuelto. La diplomacia está en el centro de nuestra política exterior", dijo Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos. En su primer gran discurso sobre política exterior desde el Departamento de Estado, remarcó que el país ahora se centrará más en la diplomacia multilateral y trabajará con otras naciones colaborativamente. A grandes rasgos, el tono del discurso pareció estar diseñado para restaurar "el orden y la fe global" en los Estados Unidos.

Como es sabido, la política exterior estadounidense suele presentarse al público luego de incorporada en la agenda del gobierno. Antes del discurso del 5 de febrero, las expectativas eran que, si bien no se esperaba que el presidente describiera en detalle los planes de su nueva estrategia, sí buscaría enmarcar su política exterior en torno a apuntalar

alianzas y regresar al multilateralismo luego de la administración de Trump, que estuvo marcada por acciones unilaterales y el desinterés por la diplomacia tradicional.

Las intenciones de la nueva administración parecían evidentes y el discurso, tal cual lo esperado, puso énfasis en construir una nueva política exterior norteamericana. "America is Back", repitió el Presidente Biden al comienzo.

"Repararemos nuestras alianzas, nos comprometeremos con el mundo una vez más, no para enfrentar los desafíos de ayer, sino los de hoy y los de mañana. (...) Debemos enfrentar el nuevo momento, acelerando los desafíos globales. Desde la pandemia hasta la crisis climática, pasando por la proliferación nuclear, desafiando la voluntad solo para que las naciones trabajen juntas y en común, no podemos hacerlo

solos”, explicó.

Uno de sus mayores anuncios fue que el gobierno de Estados Unidos pondría fin al apoyo a las operaciones ofensivas en Yemen. A pesar de que la actitud de Estados Unidos sobre Irán brilló por su ausencia, hoy sobrevuela una sensación de alivio entre las agencias de la ONU y los trabajadores humanitarios conectados a la situación en Yemen, donde una guerra era (y todavía es) palpable. Cabe destacar que, después de que los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos lanzaran su campaña aérea en 2014 contra los rebeldes Ansar Allah (Houthi), vinculados a Irán, murieron decenas de miles de yemeníes, sumergiéndose en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Actualmente, Yemen es uno de los principales puntos de conflicto entre Arabia Saudita e Irán y ello ha estado desestabilizando la región.

Además de comunicar sobre lo que hará Estados Unidos durante los próximos cuatro años, el discurso dejó una declaración de repudio público a muchas de las políticas de Donald Trump. Paso seguido, en primer lugar prometió hacer frente a los ataques globales del gobierno chino contra los derechos humanos. China es quizás el mayor desafío internacional que enfrenta Biden al comenzar su presidencia. El jefe de Estado llamó a Beijing su "competidor más serio", remarcando que: "enfrentaremos los abusos económicos de China, contrarrestaremos su acción agresiva y coercitiva y rechazaremos su ataque a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global".

En segundo lugar, manifestó que es necesario presionar al gobierno ruso para que libere a Alexei Navalny: "El encarcelamiento por motivos políticos de Alexéi Navalny y los esfuerzos de Rusia para reprimir la libertad de expresión y reu-

-nión pacífica son un motivo de profunda preocupación para nosotros y la comunidad internacional. El Señor Navalny, como todos los ciudadanos rusos, tiene derechos bajo la Constitución".

Por último, manifestó la necesidad de que existan "consecuencias"; para el golpe militar en Myanmar, urgiendo a la liberación de todos los líderes políticos que permanecen arrestados por orden de los militares, entre ellos la líder Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint. Biden sostuvo que "Los militares birmanos deben renunciar al poder que han tomado, liberar a los activistas y funcionarios que detuvieron, levantar las restricciones a las telecomunicaciones y abstenerse de la violencia".

La administración Biden también decidió reafirmar el compromiso con la OTAN, con agencias de la ONU como la Organización Mundial de la Salud y regresar a escenarios internacionales como el Acuerdo climático de París. También conectó la defensa de los derechos humanos a nivel doméstico con la promoción estadounidense de esos derechos en el exterior. Es claro que la referencia a la importancia de restablecer el orden a nivel interno aludió a los problemas de su predecesor al aceptar la derrota y, principalmente, a los recientes disturbios en el Capitolio del 6 de enero.

Todo esto es muy bienvenido. Sin embargo, como todo presidente Biden será juzgado por hechos y no por palabras. A pesar del respaldo que manifestó Biden a las instituciones internacionales, obvió mencionar dos órganos clave para la defensa de los derechos humanos. Mientras afirmó la reincorporación del gobierno de los Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y su reincorporación a la Organización Mundial de la Salud, no aseguró volver a compro-

-meterse con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que Trump abandonó, o levantar las sanciones de la anterior administración a la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, quizás el 20 de enero haya traído un aire novedoso. En los últimos años, el desarrollo de la campaña presidencial pareció un terreno bélico. Demócratas y Republicanos en las antípodas retóricas, deshaciendo la imagen de un país razonable y unificado. La postura exterior de Biden parecería distar estructuralmente de la óptica del último período de gobierno.

Esto fue evidente desde su primer día como presidente. Biden buscó instalar un mensaje claro a través de 15 acciones ejecutivas: vendrá un cambio de rumbo. Entre esas primeras 15 decisiones, el presidente reforzó su postura frente al COVID-19, exigiendo el uso de máscaras en propiedades federales, impulsó el retorno del país al mencionado Acuerdo climático de París, eliminó las prohibiciones de ingreso a las personas provenientes de naciones de mayoría musulmana y anunció el detenimiento de la construcción del muro a lo largo de la frontera sur de los Estados Unidos.

Esta última acción podría representar una nueva era para el relacionamiento del país con América Latina. El “Estados Unidos primero” de Trump tuvo una fuerte impronta de imprevisibilidad, acogida a líderes autócratas y resistencia a la cooperación internacional. En su discurso de apertura Biden buscó desprenderse de esta narrativa, haciendo hincapié en la importancia de los valores democráticos como un aspecto clave de la identidad y la ética de los Estados Unidos. En ese marco, es posible que los latinoamericanos esperaran una mención o reconocimiento a las tantas crisis simultáneas que atraviesa el continente.

Sin embargo, latinoamérica no está entre las prioridades urgentes de la nueva administración ni fue mencionada en el discurso, aunque sí está en la agenda. “La prioridad del presidente (...) [es] administrar responsablemente la frontera, mantener unidas a las familias, hacer crecer nuestra economía, abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica y garantizar que Estados Unidos pueda seguir siendo un refugio para quienes huyen [de la persecución]”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a fines de enero.

De acuerdo con la revista Foreign Policy, el presidente Biden planea construir políticas migratorias más humanas, resolviendo la situación de los latinoamericanos que se encuentran tanto en la frontera como dentro del territorio estadounidense. Este esfuerzo requerirá cooperación principalmente de los gobiernos de México y Centroamérica,. Más allá de resolver la crisis de refugiados, el círculo cercano del presidente Biden ha insinuado que su administración también se centrará en medidas anticorrupción, multilateralismo, crisis climática y ayuda a las inversiones, especialmente a la luz de la creciente asistencia china para el desarrollo en la región.

En resumen, hoy parecería ser que el camino de Biden es el camino diplomático, apartado de la venta de armas, el castigo público y las amenazas azarosas. Pero aunque Biden claramente buscara explicitar su posición y reconectar con antiguos aliados, eso tomará tiempo. Su discurso fue escuchado en silencio, por ejemplo, desde Europa y el Reino Unido.

Sería fácil aplicar términos como la “doctrina Biden” a lo que fue esencialmente una reafirmación de objetivos políticos estadouniden-

-ses de larga data después de una alarmante
pausa de cuatro años. Pero el discurso fue más
que un simple toque en el timón: señaló un
cambio significativo en los medios que EE.UU
empleará para reestructurarse
internacionalmente.

¿Te gustaría recibir el Newsletter en tu correo electrónico?

[¡Suscribite acá!](#)

Somos consciente de la cantidad de spam que se recibe a diario, por eso, realizamos un resumen de las principales noticias para que no te pierdas nada de lo que pasa en los Estados Unidos

EDITORES

Pedro Isern; Agustín Pizzichillo; Angelo Bardini; Lucía Salvini